

REBELDÍA CONTRA EL GLOBALISMO NEOLIBERAL Y EL TLCAN EN EL MÉXICO RURAL: ¿DEL ESTADO CORPORATIVISTA A LA FORMACIÓN POLÍTICO- CULTURAL DEL CAMPELINADO?¹

Armando Bartra² y Gerardo Otero³

Resumen

El propósito de este ensayo es describir y analizar como ha enfrentado el campesinado al globalismo neoliberal y las políticas públicas asociadas con esa ideología. Con el término “globalismo neoliberal” queremos designar la ideología que está detrás de las políticas de liberalización económica y privatizadoras encaminadas a abrir la economía al comercio internacional y la inversión extranjera, la privatización de las empresas paraestatales, la eliminación de la mayoría de los subsidios, el “adelgazamiento” de la mayoría de los programas sociales del gobierno, etc. Si bien estas políticas se iniciaron a mediados de los años ochenta, su consolidación mayor se dio con el ingreso de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual se inició en 1994. Por lo tanto, nuestro análisis se enfoca en el período de 1982 a 2008.

El ensayo se compone de una introducción y tres apartados más donde se analiza la evolución de las organizaciones y el movimiento

¹ Recibido: Abril 05. Aceptado: Agosto 14

² Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Maya A.C.

³ Profesor de Sociología y director del Programa de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Simon Fraser en Vancouver Canadá.

campesino en el periodo antes referido y termina con una conclusión de que los movimientos indígenas y campesinos pueden constituir un movimiento campesino clasista, si ambos movimientos convergieran como clase.

Palabras clave: Globalismo neoliberal, corporativismo, organización campesina, movimiento campesino

Summary

The purpose of this essay is to describe and analyze the ways in which peasantry has faced neoliberal globalism and the public policies associated with such ideology. With the term ‘neoliberal globalism’ we designate the ideology behind economic liberalization and privatization policies directed to the opening of the economy to international trade and foreign investment, the privatization of state companies, the elimination of most subsidies, the narrowing of most government social programs, etcetera. Although these policies started in the mid 1980s, their consolidation happened with the integration of Mexico to the North American Free Trade Agreement (TLCAN) in 1994. Our analysis is thus centered on the period from 1982 to 2008.

The essay is made of an introduction and three sections where the evolution of peasant organizations and movements during that period are analyzed, and ends with the conclusion that indigenous and peasant movements can constitute a class peasant movement, if both movements converge as a class.

Key words: Neoliberal globalism, corporativism, peasant organization, peasant movement.

Introducción

Durante la mayor parte del Siglo XX, el sistema político mexicano fue descrito como autoritario, de partido único dominante o como régimen semi-democrático. Fueron tres los factores más sobresalientes de este

sistema, mismos que dan cuenta de la legendaria estabilidad política y de la sólida dominación por parte del Partido Revolucionario Institucional, PRI. El primer factor fue precisamente la dominación del PRI desde que se organizó su ancestro, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 para aglutinar a las facciones revolucionarias, pasando por el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) como se llamó de 1936 a 1946. El segundo factor, la naturaleza corporativista del Estado, había estado en construcción desde tiempos de la revolución que duró casi una década, de 1910 a 1920 y en la cual murieron en combate un millón de gentes.

El corporativismo estatal ha significado, pues todavía existe, que las clases y los grupos subordinados se organizaran, pero que sus organizaciones tenían que ser reconocidas y legitimadas por el Estado. De hecho, algunas organizaciones se formaron a partir de la iniciativa del propio Estado, como fue el caso de la principal organización del campo, la Central Nacional Campesina (CNC). La forma preferida para que el Estado otorgase legitimidad a las organizaciones era que se afiliaran al partido dominante, el PRI aunque se permitió que otras organizaciones también existiesen, siempre y cuando su lealtad hacia el Estado no estuviera en duda (Bartra, 1985; Mackinlay y Otero, 2006; Samstad, 2002).

Como tercer factor tenemos que el corporativismo estatal involucra una relación autoritaria, desde arriba, en las relaciones Estado - Organizaciones de masas. No obstante, esta relación también ha involucrado un cierto grado de reciprocidad, a partir de la cual las bases de las organizaciones han recibido algo a cambio de su lealtad hacia el Estado (Córdova, 1972; González Casanova, 1983; Cornelius, 2000; Hellman, 1994). Cabe aclarar de entrada que este sistema político funcionó con estas características principalmente durante el periodo que va de los años treinta hasta principios de los ochenta del siglo XX.

Para 1982, las bases económicas del corporativismo estatal se habían erosionado considerablemente, lo cual coincidió con la crisis del endeudamiento externo y la moratoria de pagos a los acreedores extranjeros. Para estas fechas y desde los años treinta, los gobiernos de México habían implementado una reforma agraria por la cual se había repartido cerca del 50% de las tierras agrícolas, forestales y ganaderas en la forma de ejidos o

comunidades agrarias, las dos formas de tenencia creadas por el Artículo 27 de la Constitución de 1917; uno de los principales logros de la revolución. Podría decirse que la reforma agraria fue la principal recompensa para el campesinado por su participación en la gesta revolucionaria y por su eventual lealtad al PRI-Estado. Sin embargo, poco después de la crisis de la deuda externa de 1982, el Estado lanzó un proceso de liberación económica que estremeció los cimientos del corporativismo estatal y del modelo de desarrollo hacia dentro que se había seguido por cinco décadas (Otero, 1996, 1999; Bartra, 1992, 2003; Hernández Navarro, 1992, 1994).

La liberalización económica o el neoliberalismo, como se le conoce popularmente, fue una medida que se tomó en parte para enfrentar la crisis de la deuda, pero también fue algo que promovieron arduamente las fracciones más organizadas de la clase capitalista mexicana (Valdez Ugalde, 1996) y la tecnocracia política que controla el Estado (Centeno, 1994; Morton, 2003). Con el colapso de los cimientos económicos del corporativismo estatal, surgió la interrogante de si el campesinado y otras clases y grupos subalternos podrían formarse político- culturalmente en forma independiente del Estado: ¿Podrían formar estas clases y grupos una parte vigorosa de la sociedad civil para cuestionar al Estado autoritario y promover sus reivindicaciones a la vez que retuviesen su independencia del Estado y su autonomía de los partidos políticos? En otras palabras, ¿sería posible que las clases y grupos subalternos se “empoderaran” como agentes constituidos político- culturalmente, con demandas definidas y organizaciones independientes que las promuevan?

El propósito de este ensayo es describir y analizar como ha enfrentado el campesinado al globalismo neoliberal y las políticas públicas asociadas con esa ideología. Con el término “globalismo neoliberal” queremos designar la ideología que está detrás de las políticas de liberalización económica y privatizadoras encaminadas a abrir la economía al comercio internacional y la inversión extranjera, la privatización de las empresas paraestatales, la eliminación de la mayoría de los subsidios, el “adelgazamiento” de la mayoría de los programas sociales del gobierno, etc. Si bien estas políticas se iniciaron a mediados de los años ochenta, su consolidación mayor se dio con el ingreso de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual se inició en 1994. Por lo tanto,

nuestro análisis se enfoca en el período de 1982 a 2008. Se inicia cuando el Estado mexicano había llegado a su punto climático en las relaciones corporativistas con la mayoría de las clases y grupos en la sociedad, cubre la aparente transición democrática que se inició en el 2000, cuando ganó el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Vicente Fox y llega hasta el año en que todos los productos agrícolas fueron desgravados de aranceles según las reglas del TLCAN, el 2008. Si bien el PRI perdió la presidencia en el año 2000, todavía retiene una porción significativa de curules en ambas cámaras del Congreso y su estrategia ha sido convertirse en el partido de co-gobierno con el PAN. Además, el propio PAN ha tratado de reconstituir o de apropiarse de las organizaciones de los grupos subordinados para recomponer el corporativismo (Mackinlay y Otero, 2006; Singelmann, 2006).

En la primera sección se discute cómo varias organizaciones campesinas han buscado su independencia del Estado y su autonomía de los partidos políticos, en su intento por dismantelar el corporativismo del PRI-Estado y de luchar por sus tanto económicos como políticos en el ámbito de la sociedad civil. La segunda sección discute la muerte y resurrección de las organizaciones agrarias que han luchado por su autogestión y el control democrático del proceso productivo. La tercera sección discute la emergencia de una amplia movilización campesina –“El campo no aguanta más” (ECNAM). Este movimiento se inició a los ocho años de vigencia del TLCAN, cuando se dio la primera etapa de desgravación de la mayoría de los productos agrícolas, con la excepción del maíz, los frijoles, el azúcar y la leche, que se desgravarían en 2008. La principal demanda de ECNAM fue la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN para recuperar la agricultura nacional.

Por último, en las conclusiones se plantea la interrogante de si la trayectoria de la movilización campesina en la era del globalismo neoliberal conduce hacia la gran convergencia de un movimiento campesino clasista, que articule sus vertientes mestiza e indígena. Si pudiéramos sustentar esta convergencia, entonces estaríamos hablando de que el campesino se está formando o constituyendo como clase, en términos políticos-culturales, es decir, tanto por el planteamiento de sus demandas como por su articulación identitaria como clase independiente.

Las organizaciones campesinas autónomas negocian con el Estado

El final de 1988 marcó el punto más álgido de la insurgencia civil que amenazó con expulsar al PRI de Los Pinos (la casa presidencial en México). Diez organizaciones campesinas e indígenas firmaron el Convenio de Acción Unitaria (CAU) que articulaba las demandas por la tierra, por la reactivación del campo y por las demandas culturales y territoriales de los pueblos indios (Flores, 1992, 1995, 1998; García Leyva y Burguete, 1998). Las diez organizaciones signatarias fueron: la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), la Central Campesina Cardenista (CCC), la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOCP), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH). Su acuerdo se firmó en el contexto del “Primer Encuentro Nacional Agrario”, dándose este encuentro los días 27 y 28 de noviembre, el cual representó un verdadero encuentro histórico ya que abarcó organizaciones zapatistas de primera generación, como la CNPA, organizaciones para la lucha económica como la UNORCA y grupos de convergencia étnica como el CNPI. Es decir se entremezclaron las luchas por la independencia, la autonomía y la autogestión.

La movilización fue de corto aliento. Cuarenta días más tarde, el 6 de enero de 1989, el nuevo Presidente Carlos Salinas inauguraba su nuevo gobierno ilegítimo (marcado por la ampliamente compartida creencia de fraude electoral) haciendo un llamamiento a constituir el Congreso Agrario Permanente (CAP). El llamamiento se hizo en el 70 aniversario de la muerte del líder Emiliano zapata, como para ponerle el último clavo a su ataúd. Las organizaciones corporativistas pronto respondieron al llamado incluyendo la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina Independiente (CCI), el Consejo Agrarista Mexicano (CAM), la Unión General de Obreros y Campesinos de México-Jacinto López (UGOCM-JL), todas ellas afiliadas al PRI. Una sorpresa, sin embargo, fue que la mayoría de los afiliados del independiente CAU también

se afiliaron al CAP. Sólo tres organizaciones se abstuvieron de hacerlo y salieron bien libradas: CNPA, FDCCH y CNPI.

La constitución formal del CAP se dio en mayo de 1989. Se convirtió en el espacio de interlocución entre los campesinos organizados y el poder ejecutivo federal. Los antecedentes ignominiosos de esta cooptación masiva de las organizaciones campesinas habían sido el Paco de Ocampo, firmado en 1976 por iniciativa del Presidente Luis Echeverría (1970-1976) y la efímera Alianza Nacional Campesina creada por el Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) en 1983.

Con la formación del CAP por instituciones presidenciales, el gobierno mexicano imponía una vez más las formas de organización sobre la sociedad. Esto dio lugar a la ruptura de la incipiente tendencia de la política agraria hacia la articulación independiente, no oficialista que representó el CAU, pues este se dispersó tras haber sido desertado por la mayoría de las organizaciones pronto después de su nacimiento.

Si bien Salinas tomó el poder en medio del descrédito, la ilegitimidad y el fraude electoral, una vez en el poder su voz se convirtió en la del “jefe”: en el mandato inobjetable que presupone que cualquier favor del Estado depende de la obediencia. En este caso, la obediencia de virtualmente toda la dirigencia campesina a las instrucciones de Los Pinos tenía las más graves consecuencias: En esta coyuntura específica, significaba condonar el reciente fraude electoral, ofrecerle respeto al usurpador y darle la espalda al candidato defraudado, Cuauhtémoc Cárdenas, cuya campaña había sido apoyada por la mayoría de las organizaciones campesinas. En términos estratégicos, esta medida se convirtió en el primer paso en la confabulación del liderazgo agrario con el gobierno, encaminado hacia un vuelco rural de grandes proporciones, la “reforma de la reforma agraria” que culminaría unos años más tarde con los cambios legislativos al Artículo 27 constitucional en 1992 y la implementación del TLCAN en 1994.

La oposición al ominoso proyecto salinista estuvo encabezado por el *Movimiento Nacional de Resistencia Campesina* (Monarca), constituido por doce organizaciones no corporativistas que firmaron el Plan de Anequílco el 28 de diciembre de 1991 (Monarca, 1991,1992). Este plan

defendía la propiedad social de la tierra, que ahora se veía amenazada por los eminentes cambios institucionales de la legislación agraria, pero también rechazaba la política neoliberal que pretendía “llevarnos a la ruina, al hacernos competir (en situación desventajosa) con el Tratado de Libre Comercio” (*Cuadernos Agrarios*. Nueva época, no. 3, 1991). Durante los primeros meses de 1992, esta convergencia organizativa cambió su nombre, cuyas siglas sonaban a realeza - Monarca- ha un nombre más adecuado: Coalición de las Organizaciones Agrarias (COA). La COA dirigió varias acciones de protesta que culminaron con una movilización nacional el significativo 10 de Abril, en conmemoración del nacimiento de Zapata.

Mientras que los campesinos mostraban su oposición en las calles y caminos, la contra-reforma avanzaba inexorablemente en los pasillos de Los Pinos. Ahí se daban negociaciones de alto nivel entre los líderes de la CNC y algunas organizaciones independientes como la UNORCA, tratando de limar los aspectos más regresivos de la iniciativa constitucional y de corregir la insuficiencia de la política agrícola del Estado (UNORCA, 1992). A Salinas le interesaba enormemente obtener el consenso de la dirigencia campesina para su proyecto. Sabía que todo lo que se compra con dinero es en última instancia barato, de manera que aceptaba sus demandas mientras que la esencia de su contra-reforma no se viera comprometida. Así pues, el 14 de Noviembre de 1991, la presidencia publicó sus “Diez puntos para la libertad y la justicia en el campo”, una promesa de cambios progresistas en la política rural que consideraba una abundante asignación de recursos, incluyendo fondos para que los agraristas más inquietos obtuvieran tierra para sus bases solicitantes de tierra. Por lo tanto, la oferta de Salinas fue una cara pero apenas disfrazada mordida.

Bajo estas condiciones, la iniciativa de reforma del Artículo 27 de la Constitución, que suprimía el derecho de los campesinos a solicitar más tierras para su redistribución y abría la puerta a la privatización del ejido y las comunidades agrarias, fue aprobada por los legisladores del PRI y del PAN. Sólo el recientemente constituido Partido de la Revolución Democrática (PRD), una convergencia de la izquierda socialista y una fracción nacionalista del PRI, se opuso a la nueva Ley Agraria. Desde su nacimiento en 1989, el PRD ha estado vinculado con los campesinos de

tradición progresista del cardenismo, como los de La Laguna (véase Otero, 2004, capítulo 5) y promovió una organización de convergencia llamada Unión Campesina Democrática (UCD). La UCD fue apoyada con algo de trepidación por la CIOAC, la CNPA y otras organizaciones independientes que simpatizaban con su posición política pero no con su afiliación cooperativista a un partido político, aunque éste fuese de oposición.

Las organizaciones campesinas que cuestionaron la contrarreforma agraria fueron etiquetadas por los medios de “intolerantes y conservadoras” y su mayor estigma provenía de ser apoyadas por el PRD, al cual etiquetaban como “el partido de la violencia”. En contraste con esto, la derecha se regocijaba con la reforma: un diputado del PAN, rebosante de alegría, afirmó que la iniciativa de Ley Agraria de Salinas era un triunfo cultural de Acción Nacional (Canabal, 1991, 1992).

Con el debilitamiento de las organizaciones independientes, la COA desapareció sin pena ni gloria en 1993. De aquí en adelante, los debates decisivos sobre el futuro del campo se dieron entre el ejecutivo Federal y los crecientemente domesticados CAP y CNC. El tema principal ya no era la reforma constitucional, que fue aprobada en enero de 1992, si no el TLCAN: un acuerdo comercial asimétrico que, con muchos argumentos, sacrificaba la producción nacional en nombre de la globalización y anunciaba la exclusión socio económica de millones de mexicanos “redundantes”. Este acuerdo amenazaba la agricultura y sus primeras víctimas eran los campesinos. El problema fue que los opositores al tratado comercial en esos términos – partidos como el PRD y organizaciones campesinas como la CNPA y la CIOAC - estaban fuera de juego y la negociación se estaba dando en el terreno de aquellos que daban la apertura comercial y la globalización por sentadas.

Justo cuando se acababan de aprobar los cambios al artículo 27 de la Constitución – con una resistencia modesta y la aclamación obediente de las organizaciones cooptadas – el TLCAN fue firmado por el congreso en 1992, muy por delante de su aprobación por el propio congreso de los Estados Unidos, que lo pasaría en Noviembre de 1993. Los tecnócratas encabezados por Salinas no solo promovían exitosamente el proyecto neoliberal; rompieron también la resistencia campesina y desarticularon el

incipiente encuentro entre las organizaciones rurales “independientes” (del Estado) y las “autónomas” (de los partidos políticos). A estas alturas debe quedar claro que en México se designan como “independientes” aquellas organizaciones que están fuera del ámbito de la cooptación oficial, pero que pueden estar afiliadas con algún partido político, comprometiendo así su “autonomía.” Las Organizaciones “Autónomas”, en cambio, son aquellas que gozan tanto de la independencia del Estado, como de la autonomía de los Partidos Políticos. Esto les permite enfocarse en los intereses económicos-corporativos de sus bases que pueden tener alianzas, táctica política para avanzar en sus intereses.

Inicialmente había sido muy prometedora la convergencia de las organizaciones campesinas con la poderosa insurgencia civil “cardenista”, que emergió tras el fraude electoral de 1988 y que impidió al hijo del General Cárdenas tomar la Presidencia de la República. En vez de que se consolidara este acercamiento con la izquierda, las organizaciones “autónomas” optaron por hacer un pacto con Salinas y se aliaron con la oficialista CNC, mientras que las “independientes” se aislaron y se enfrentaron solas con el linchamiento de los medios. Así pues, a principios de 1992, cuando las tercas organizaciones de la COA se reunían en el auditorio del combativo Sindicato Mexicano de Electricistas, CNC, UNORCA, UGOCP, ALCANO (Alianza Campesina del Noroeste) y otras se reunían en Oaxtepec, Morelos, para constituir lo que se llamó el “Nuevo Movimiento Campesino” (Bartra, 2003a).

La realidad es que la única ganadora en este baile político fue la corriente reformista de la CNC, dirigida por Hugo Andrés Araujo, quien había sido miembro fundador de UNORCA, una organización que antaño había promovido los principios de la autonomía autogestionaria dentro de los rangos de las organizaciones oficiales corporativistas. Apoyada por el Sector de Organizaciones Económicas de la CNC, el grupo de Araujo promovió una serie de encuentros nacionales de campesinos organizados con la asistencia de unas 700 asociaciones productivas y con la participación de la UNORCA, UGOCP y ALCANO. Se dieron reuniones multitudinarias donde el tema central era la “Nueva Alizanza” entre los campesinos y el Estado. En el encuentro de Oaxtepec, lanzaron un llamamiento para la afiliación a lo que llamaron el “Nuevo Movimiento Campesino”. Para

la tercera reunión que se dio en agosto, Araujo había llegado al comité ejecutivo de la CNC.

Más allá de las trayectorias personales de intelectuales y líderes campesinos que habían sido de izquierda – como Hugo Andrés Araujo y Gustavo Gordillo, quienes terminaron colaborando para el gobierno de Salinas – lo que aquí nos interesa explicar es la trayectoria organizativa de una corriente importante del movimiento agrario (Gordillo, 1988, 1990). La UNORCA, en particular, fundada por Araujo entre otros, tenía una historia combativa en las luchas agrarias. Había luchado tanto por la independencia del Estado como por la autonomía de los partidos políticos. Irónicamente, sin embargo, terminó haciendo alianza con el gobierno de Carlos Salinas, el cual no solo era considerado ilegítimo por la mayoría de los observadores serios de la política mexicana, si no que también fue el promotor de políticas radicalmente anti – campesinas como se evidenció con los cambios al Artículo 27 y su apoyo al TLCAN.

La contra reforma agraria de Salinas sedujo, dividió y cooptó al liderazgo rural no solo a través de mordidas sino, más importante aún, con la promesa ilusoria de emancipación vía el libre comercio y el espejismo de la iniciativa empresarial que a menudo acompaña la retórica de la “auto-gestión”. El liderazgo campesino se convenció de que una vez liberado de su vasallaje del Estado, operando dentro de la esfera de libre mercado, el sector social de la producción agrícola – es decir los pequeños y medianos campesinos – fortalecerían su posición económica, y de esta manera lograría un bienestar y justicia social, sustentables para sus bases. Lo que los tecnócratas en el poder veían como privatización; desregulación y la cancelación de apoyos gubernamentales, la corriente autogestionaria veía como la oportunidad para que los pequeños productores se emanciparan por al ruta de la competitividad. En su lucha por combatir el tutelaje estatal, los campesinos pensaron que habían encontrado un aliado en el mercado.

Gustavo Gordillo elaboró de la manera más lúcida esta corriente autogestionaria en su libro de 1988, mismo que escribió justo antes de hacer su alianza con Salinas. Para él, la reconstitución del Ejido tenía que pasar por el control campesino sobre el proceso productivo. A su vez, esto requiere que los campesinos desarrollen organizaciones económicas orientadas

hacía bloquear las fugas de excedente económico en los distintos mercados, por ejemplo, al organizar cooperativas por la compra de insumos y cooperativas para la venta de los productos agrícolas. A la vez que tales organizaciones económicas lucharan por retener el excedente económico, deben luchar por adquirir espacios en la toma de decisiones de política de las agencias gubernamentales. Este proceso dual debería permitir que los campesinos establezcan una articulación entre la democracia política y económica, a la vez que crearían un espacio para ejercer un mayor desarrollo del poder campesino.

Habrá que ver si los campesinos serán capaces de negociar exitosamente una porción mayor del excedente económico, dentro de la actual estructura de mercado y un Estado “nacional” que trabaja para el “enemigo”. Además, es importante preguntarse que pasará con los campesinos al quedar privados de condiciones mínimas por la productividad y no puedan producir un excedente económico para negociar. Si bien son importantes, estas interrogantes ahora salen sobrando puesto que lo que realmente fracasó a principios de los años noventa no fue la emancipación económica o el modelo “autogestionario” que planteaba Gordillo, sino la ruta política que escogió para promoverlo: Establecer un vínculo con el gobierno precisamente cuando los tecnócratas de ese gobierno estaban promoviendo la versión mas transparente de la reforma neoliberal. Así pues, la “Nueva Alianza” entre campesinos y Estado no fue más allá de captar algunos espacios en las organizaciones corporativistas y ocupar algunos puestos intermedios dentro de la burocracia gubernamental. En lugar de alcanzar una Comuna Campesina, el estilo de la parisina, o como lo planteó Gordillo en el título de su libro, “Asalto al Cielo” (1988), lo que hemos presenciado es un imprudente y frustrado “asalto del Estado”.

La apuesta fallida terminó en tragedia - puesto que el autonomismo campesino de los años ochenta había sido un movimiento amplio, progresista e innovador que desarrolló estrategias rurales muy destacadas. La formula de la “apropiación” del excedente económico, que promovieron algunas de las organizaciones ligadas a la UNORCA, fue una parte aguas en la lucha del pueblo mexicano por liberarse del intrusivo Leviathan. Cuando el barco de la autogestión se tornó en alianza con el Estado, surgió una contradicción de múltiples capas e insostenible: Aquellos líderes

para quienes la bestia negra había sido el Estado, los partidos políticos y los políticos ahora se transformaban en peones del gobierno de Salinas, aliados del PRI y actores dentro de la CNC. Esta corriente autonomista, convencida que la burocracia debería retirarse del campo, presencié cómo sus principales cuadros fueron incorporados a la burocracia estatal. De maoístas críticos del presidencialismo se convirtieron en tecnócratas amigos íntimos de presidente. De su “línea de masas” (una corriente de maoísmo en México), la cual supuestamente tomaba la línea de sus bases, terminaron apostándole a negociaciones copulares. Su “política popular” (uno de los eslóganes famosos de Línea de Masas) llegó a ser conducida en los salones de los Pinos. Pensando que estaban afiliándose al “Nuevo Movimiento Campesino”, estas organizaciones populares se convirtieron en la escena del último episodio del clientelismo agrario del México del siglo XX.

El establecer una alianza con el Estado para construir autonomía en el mercado, justo cuando él está tratando de deshacerse de los campesinos, exigía que los campesinos encontrasen aliados en el mercado con una vacilante burocracia estatal. Estos aliados eran los empresarios capitalistas. La nueva asociación de capitalistas privados y campesinos promovida por el Estado se propuso por primera vez la Ley de Fomento Agropecuario (LFA) en 1981, pero que nunca fue aplicada en la práctica. Para los años noventa, esta nueva asociación fue promovida por la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Agricultura en el gobierno de Salinas, cuyo titular era Gustavo Gordillo. El proyecto piloto fue “Vaquerías”, una asociación entre Promotora Agropecuaria GAMEESA, un gran grupo industrial de Monterrey, con ejidatarios del estado de Nuevo León (Garza y Gonzaga, 1992). Iniciado en 1990, ya había fracasado para 1992 a pesar de que recibió subsidios gubernamentales y de que el Estado favoreció el experimento por todos sus medios. De aquí la contradicción de los autonomistas: su discurso estaba basado en el espejismo de que privatización equivalía a socialización. La asociación entre campesinos y capitalistas, subsidiada por el Estado, debía fomentar la disociación entre campesinos y Estado. El problema fue que el capital privatizó los subsidios que debían haber terminado que los subsidios y todo el modelo se colapsó. La directriz de política campesina del ex -asesor de organizaciones campesinas combativas, Gustavo Gordillo, fue sustituida por el neoliberal ortodoxo Luis

Téllez Kuenzler en la Subsecretaría de Planeación. De hecho, el papel de Gustavo Gordillo en el Estado se convirtió explícitamente en ayudar al control político del campesinado, mientras Téllez Kuenzler diseñaba la política agrícola desde una perspectiva estrictamente tecnocrática.

Esta división del trabajo dentro de la Secretaría de Agricultura la planteó pública y explícitamente Luis Téllez Kuenzler en su simposio sobre las venideras reformas agrarias, patrocinado por el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Texas en Austin, en noviembre de 1990, en el cual Gerardo Otero fue invitado a hacer un comentario a la ponencia de Gordillo (Otero 1991).

La meta de los tecnócratas no era la “Nueva Alianza” entre campesinos y Estado sino la modernización excluyente; una transformación imposible sin una severa purga rural demográfica, sin una cirugía de población que liberase al país de tres o cuatro millones de familias campesinas. Para que esto ocurriese, lo esencial no era amputar la Constitución sino lanzar una nueva política agrícola orientada a promover el desmantelamiento de los sectores “no competitivos”, básicamente el sector los productores de cereal, el cual abarca a la mayoría de los campesinos. Hubo iniciativas anteriores con este objetivo, incluida la LFA de 1981 y el ingreso de México al Acuerdo General de Tarifas Arancelarias y Comercio (GATT) por sus siglas en inglés en 1986. Esto último sentó las bases para que México se desarmara económicamente en forma unilateral. Esta apertura comercial dispareja y el abandono de las políticas de apoyo y regulación llevaron luego al TLCAN. Para México, este acuerdo comercial implicó la renuncia expresa de su soberanía alimentaria y laboral (Bartra, 2006), anticipando la muerte de la agricultura campesina, y anunciando el inexorable éxodo rural del cambio de milenio (Otero y Pechlaner, 2008).

Muerte y resurrección del movimiento campesino autogestionario

Las reformas a la Ley Agraria de 1992, diseñadas por la UNORCA a fines de los años ochenta para alcanzar la autonomía campesina, fueron claramente progresistas en cuanto intentaban expandir las atribuciones económicas, sociales y políticas de las organizaciones campesinas. Pero su talón de Aquiles

fue el medio elegido para promoverlas: una alianza con el corporativismo rural y las corrientes “modernizadoras” del gobierno. Esta fue una apuesta equivocada estratégicamente, dado que los modernizadores neoliberales eran anti-campesinos, aun si las nuevas organizaciones productivas quedaran envueltas en el “sector social de producción”, estructuradas en “empresas”. En términos tácticos, fue una apuesta torpe que ponía a los campesinos en las manos de un anti-corporativismo sistemático, precisamente cuando la insurgencia organizativa se estaba tornando en una insurgencia cívica.

En esta difícil coyuntura, aquellas organizaciones campesinas como la UCD que se afiliaron orgánicamente a la insurgencia cívica, la cual se volvió partido político, reproducirían desde la oposición un corporativismo anacrónico. En esta forma de corporativismo, los intereses de la organización campesina se subordinaron a los intereses políticos del partido. La corriente mayoritaria del movimiento campesino, enmarcada en el Nuevo Movimiento Campesino, perdió su credibilidad aceleradamente: Si bien había un flujo transitorio de recursos del Estado basado en nuevas formas de corporativismo, pronto quedó claro que las puertas estaban cerradas para que los campesinos entraran con éxito al “libre mercado”. La noción de que una alianza con el capital privado podría ser un sustituto exitoso del apoyo estatal para los campesinos bajo condiciones neoliberales fue ilusoria. Tras reducir a la mayoría de los campesinos a la indigencia, el gobierno de Salinas ofreció el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), anunciado como un programa “participativo” de asistencia social. En contraste con las viejas prácticas corporativas, las cuales canalizaban la mayor parte del apoyo estatal al campesinado vía las organizaciones campesinas afiliadas al partido dominante, el Pronasol canalizó sus fondos directamente a grupos campesinos organizados expresamente para tal propósito. Esta forma de neocorporativismo directo, que vinculaban al presidente con los grupos de base, convirtió a los comités que negociaban fondos públicos en una nueva efímera base social. Esta fue la manera como los tecnócratas populistas compensaron el retiro del corporativismo tradicional del PRI, que era costoso e ineficiente en términos económicos (Bartra, 2003a; Mackinlay y Otero, 2006; Otero, 1996).

Algunos de los campesinos más afectados por la apertura comercial de los ochenta, especialmente después de 1994, fueron los productores

de maíz, trigo, sorgo, soya, arroz, frijol y algodón (Bartra, 2006). Estos cultivos se caracterizaban por tener alto nivel de participación campesina y cuya rentabilidad fue afectada negativamente por las importaciones, la mayoría de las cuales provenía de competidores estadounidenses subsidiados. Un ejemplo de quiebra organizativa en granos es la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Jacinto López, cuyos miembros producían trigo, soya y maíz en los irrigados Valles del Yaqui y El Mayo. Esta ARIC que había sido uno de los ejemplos más significativos del éxito de la organización campesina autónoma, operaba una unión de crédito, un fondo de seguros, una agencia de comercialización, una planta de harina, un centro de maquinaria y otras organizaciones empresariales (Otero, 1990, Gordillo, 1988; Otero, 1999: Cap. 7). De 1993 a 1996, la poderosa empresa campesina de antaño perdió progresivamente sus activos a los acreedores asta que finalmente se fue a la quiebra. Sólo, unas cuantas empresas con pocos grupos campesinos sobrevivieron a la debacle.

A los agro-exportadores campesinos tampoco les fue mejor a pesar de que tenían “ventajas comparativas”, según los supuestos de los tecnócratas. Así pues, organizaciones consolidadas como la Unión del Ejido de Cafetaleros de la Costa Grande de Guerrero fracasó al igual que los pequeños productores. El ejido había establecido una unión de crédito y una cooperativa de comercialización, había organizado a los productores de maíz y manejaba un popular centro de distribución y a principios de la noventa, había instalado una organización agroindustrial para procesar café seco y otros productos agrícolas. Después del colapso, sólo sobrevivieron unas cuantas empresas campesinas por si mismas, junto con algunos productores aislados de café orgánico (Paz Paredes, 1995; Martínez Torres, 2006).

Durante la primera mitad de los años noventa, las organizaciones rurales estaban enfrentando el grueso de la crisis. Ya abrumados, todavía tuvieron que absorber el castigo hasta 1995, año que combinó los primeros doce meses del TLCAN y las consecuencias de la crisis económica detonada por la devaluación del peso en diciembre de 1994. Con tasas de interés disparadas hacia arriba, la abismal devaluación del peso y del incontrolable costo de la inflación, el gobierno respondió con un plan de emergencia heterodoxo que incluía control de precios. Este contexto fue terreno fértil para el resurgimiento del movimiento campesino.

Inicialmente, organizaciones de pequeños productores de Jalisco, Sinaloa y Guerrero y redes como la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), se reunieron a principios de 1995 alarmados por el riesgo de que los campesinos productores de excedentes no estarían en condiciones de sembrar para el inminente ciclo primavera-verano. Para abril, representantes de 120 organizaciones de 20 estados del país tuvieron una asamblea en la Ciudad de México, en la cual acordaron luchar por una nueva política agrícola que reactivase al sector; por la renegociación de las cuotas de importación previstas en el TLCAN, especialmente aquellas por los granos básicos; subsidios para cereales, por lo menos lo equivalente a lo ejercido por nuestros socios comerciales; regulación del mercado y prestamos a tasas de interés accesibles con garantías realistas, y otras demandas.

Para mayo de 1995, campesinos de todo el país marcharon por calles y caminos tomaron agencias públicas, instalación plantones y derramaron en las banquetas toneladas de granos cuyos precios se habían colapsado. Las más intensas movilizaciones se dieron en Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Sonora Puebla y Morelos. Tuvieron el apoyo de militantes de organizaciones nacionales como la UNORCA, CODUC, CIOAC Y El Barzón, pero también de agrupaciones como la Alcano, la Comercializadora Agropecuaria de Occidente (Comargo) y algunos grupos de la oficialista CNC. La movilización de 1995 arrojó algunos éxitos, como la suspensión de pago de intereses y un aumento por los precios regionales de los cultivos, pero nada en términos de un cambio de estrategia; un tema que el gobierno ni siquiera estaba dispuesto a discutir.

Se aprendieron varias lecciones con la movilización de 1995. La plataforma definida en abril, sin embargo, apuntaba hacia un profundo cambio en la dirección neoliberal del país. El movimiento se convirtió en la primera expresión amplia y nacional que indicaba que los campesinos ya no estaban dispuestos a marchar hacia el abismo creado por la profunda liberación económica. Además las fuerzas que promovieron este movimiento constituían una alianza amplia y plural que incluía tanto organizaciones independientes como corporativas. Hasta tenían el apoyo de algunos sectores empresariales que habían sido efectuados por la apertura comercial indiscriminada y la neoregulación. Pero lo más importante es que

este movimiento llevó a la coordinación de las organizaciones regionales de productores de cereales, a nivel sectorial. Esto llevó a la formación de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), constituida en julio de 1995 por 100 organizaciones regionales de 21 estados de la república.

Esta asociación comenzó a trabajar a fines del año, promoviendo mecanismos de mercadeo directos. También buscó la transferencia a las organizaciones campesinas de la infraestructura que anteriormente operaba la Conasupo (Almacenes Nacionales de Depósito S. A y Bodegas Rurales Conasupo S.A.), que el gobierno estaba privatizando. En otras palabras, cuando el Estado quería simplemente dismantelar las agencias estatales, las organizaciones campesinas se plantearon así mismas como alternativa para operarlas, en vez de que fuesen privatizadas. Hacia principios del nuevo milenio, la ANEC tenía una presencia organizativa y de mercado en 19 estados, en los cuales operaban 220 organizaciones locales y 16 redes regionales y estatales. Tenía empresas comercializadoras, servicios de capacitación, organizaciones de asesoría, gestión y promoción campesina, procesamiento industrial y manufactura de maíz y venta de tortillas. Hacia fines de 2002 e inicios de 2003, la ANEC era una de las promotoras de la más grande movilización campesina en décadas: El “Movimiento el campo no aguanta más” (MCAM). Este movimiento amplió y profundizó el espíritu de la movilización de 1995 (Bartra, 2003c; Sánchez Albarrán, 2007).

Los cafetaleros atravesaron un proceso organizativo paralelo al de los productores de cereales, pero ellos habían empezado antes. Con un cultivo predominante de exportación, su crisis se inició en 1988, cuando la Organización Mundial del Café (WCO por las siglas en inglés) suspendió sus acuerdos económicos y su funcionamiento. La WCO había regulado los precios del café y fijado cuotas de exportación por décadas. A escala nacional, el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) fue dismantelado en 1989. Inmecafé no sólo expedía permisos y certificados de exportación, sino que desde los años sesenta también intervenía decididamente en el financiamiento, almacenamiento, industrialización y mercadeo del grano aromático campesino. Así pues, desde los años sesenta las organizaciones cafetaleras regionales habían luchado juntas contra las fallas y des-

viaciones del Inmecafé. En 1989 fundaron la coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC). Inicialmente la CNOC era el punto de reunión de otros horticultores afiliados a la CIOAC, la UNORCA y otras organizaciones con presencia nacional. Con la afiliación de unas 25 organizaciones en seis estados de la república, la CNOC llegó a ser interlocutor inescapable del gobierno, con el que se había convenido un “aterrizaje suave” para el proceso de la desregulación en marcha. La CNOC había promovido la creación de una empresa comercializadora, una marca de café tostado y en 1994, un préstamo denominado en dólares que llegó a ser el acabose con la devaluación del peso en diciembre de ese año. Un nuevo programa gubernamental, Alianza Café, no consistía en realidad en un programa de desarrollo. Pero sí logró incorporar a las organizaciones corporativas regionales dentro de las redes clientelares de las redes estatales de subsidios, mientras que las independientes aprovecharon la bonanza de los precios de mediados de los noventa para consolidar sus estrategias de exportación (Martínez Torres, 2006).

Hacia fines de los años noventa, sin embargo, cayeron de nuevo los precios del café y las organizaciones locales y estatales que apenas habían podido sobrellevar la situación se dieron a la tarea de reactivar la CNOC. Esta organización tenía la presencia nacional necesaria para luchar por una verdadera política estatal cafetalera. En esta ocasión, los cafetaleros afiliados a la CIOAC y aún los afiliados a la corporativista Unión Nacional de Productores de Café (UNPC) de la CNC, se incorporaron a la lucha. Junto con los horticultores medios y grandes, constituyeron el Foro Nacional de las Organizaciones de Cafetaleros en 1997 para defender los intereses de los productores primarios ante los compradores industriales. Finalmente, en marzo del 2000, los cafetaleros se integraron a una movilización nacional que llevó unos 2,500 productores (sobre todo de Oaxaca, Chiapas y Puebla) a la Ciudad de México. Con la coyuntura favorable de las elecciones presidenciales en juego, lograron un acuerdo de programa de emergencia para el café con el gobierno.

Así pues, los cafetaleros de la CNOC reprodujeron el curso seguido por los cultivadores de cereales, organizándose finalmente en la ANEC. Sus movilizaciones buscaron alianzas con organizaciones oficiales corporativistas y con agricultores capitalistas, en el entendido de que los

efectos de las políticas anti-agrarias no distinguían entre afiliaciones ni tamaños. A fines de 2002, la CNOC estaba entre las organizaciones que promovieron el MCAM, la gran convergencia nacional de grupos campesinos y agricultores.

La tendencia a constituir organizaciones a escala nacional sobre la base de cultivos específicos no sólo estaba presente entre los cerealeros y los cafetaleros. Las comunidades forestales también se constituyeron en tales dentro de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) en 1994. Con la misma lógica, en 1992 se había establecido otra coalición a escala nacional en torno a los servicios crediticios, la AMUCSS. La naturaleza orgánica de la crisis campesina había quedado claramente expresada en el hecho de que, de 32 Uniones de Crédito que constituyeron inicialmente esta organización, para 1995 ya sólo quedaban 18 en operación y casi todas estaban prácticamente en bancarrota. Las redes que se organizaban de acuerdo a su especialización productiva o enfoque de servicios eran, en su mayoría, escisiones de la UNORCA. Se trataba de organizaciones regionales que habían convergido a escala nacional sus intereses específicos del sector. Así como la UNORCA, las redes especializadas adoptaron una forma organizativa de “coordinadoras” un modelo promovido inicialmente por la CNPA (CNPA, 1982, 2003).

Esta era una organización-frente que surgió a fines de los setenta como el vínculo movilizador entre docenas de organizaciones regionales que luchaban por la tierra y operaban con direcciones colectivas. La CNPA respetaba la autonomía organizativa de sus afiliados y promovía los intercambios horizontales entre sus base, lo cual marcaba una distinción radical del paradigma organizativo vertical y jerárquico de los sindicatos introducido por el Estado posrevolucionario. Estas organizaciones corporativistas estaban orientadas a facilitar el control político de sus bases y operaban como correas de transmisión de las directrices gubernamentales (Mackinlay y Otero, 2006). De hecho, la única organización campesina independiente activa que incluye la palabra “central” en su nombre es la más vieja: la CIOAC, fundada en 1975 como tal y que fue producto de una escisión de la CCI que había nacido en 1963 con la confluencia de miembros del PRI, del Partido Comunista Mexicano y otros. La escisión se dio cuando una de la parte de la CCI estuvo de acuerdo en incorporar-

se al Pacto de Ocampo de Luis Echeverría, en que la facción comunista constituyó la CIOAC.

En contraste con las coordinadoras multi-sectoriales, que se hicieron multidimensionales al establecer diversas redes regionales y tener una perspectiva más o menos integral, las organizaciones de convergencia sectorial en torno a una función o producto dado estaban especializadas y esto facilitaba un mayor desarrollo técnico. Teóricamente, las organizaciones de escala nacional que convergieron en la defensa de ciertos cultivos o proveedores de ciertos servicios podían promover una mayor pluralidad. Este hecho representa otro contraste con las coordinadoras multifuncionales que unificaban a sus miembros por ideología y proyecto. En general sin embargo, las organizaciones sectoriales de escala nacional unieron a quienes tenían ideologías similares, de tal manera que la representación de un sector implicaba la confluencia de diversos grupos. Tal es el caso del Foro del Café, por ejemplo constituido por la CNOC, pero también por la CIOAC y la UNPC entre otros.

La existencia de organizaciones regionales, coordinadoras nacionales, multifuncionales y redes especializadas por sector ofrece una flexibilidad considerable a los campesinos. Por ejemplo, permitió que grupos como el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC) se articulara a escala nacional con la ANEC en relación al cultivo de cereales, mientras que también se podía vincular con una red de organizaciones financieras como Colmena Milenaria en torno a su trabajo de ahorros y crédito. Otro ejemplo es CEPCO, una coordinadora estatal de cafetaleros de Oaxaca, que forma parte de la CNOC a escala nacional para cuestiones relacionadas con el café, mientras trabaja con AMUCSS en sus sistemas financieros. Pero también ha habido tensiones. La UNORCA y la CIAOC, por ejemplo, tienen cafetaleros afiliados que no participan con la CNOC, una coordinadora a escala nacional que tiene mucho en común con ellas. La Red MOCAF, la organización forestal que surgió dentro de la UNORCA, ha tenido sus diferencias con éstas. No obstante las divergencias, este grupo plural ha dado cuenta de una textura organizativa campesina más compleja y diferenciada, que multiplica sus relaciones, recursos, capacidades, saberes y sabores. Como veremos enseguida, esta virtud puede potenciarse tremendamente cuando convergen varios

ámbitos organizativos en un movimiento plural pero unificado como el que detonó en 2002.

Justo cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) estaban al frente de la lucha indianista (Bartra, 2003b; Bartra y Otero, 2005), el principal emblema del movimiento rural mestizo en los noventa era El Barzón. Se trata de una organización reactiva, una convergencia multclasista y plural desatada por agricultores ricos, pero que también incluía chicos y medianos. El hecho de que hasta los ricos se quebraron ante la reforma neoliberal testificaba la gravedad de la crisis rural y la medida en que llegó a ser excluyente (Mestries, 1997; González, 2006).

En agosto del 1996, El Barzón tomó la plaza principal de Guadalajara con 110 tractores provenientes de las regiones sur y costera de Jalisco. La “toma de Guadalajara” por agricultores ricos duró 52 largos días. Se trataba de empresarios orgullosos y trabajadores que hacía unos cuantos años casi podían tocar el cielo y ahora estaban descapitalizados y fuertemente endeudados. Sus demandas incluían apoyo para el campo, alto a las importaciones agrícolas y renegociación de la deuda. Algunos de ellos eran miembros de la CNC; otros estaban afiliados a la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) y otros a la Confederación Nacional de Ganaderos (CNG). Algunos agricultores militaban en el PRI, otros en el PAN, el PRD o hasta en el Partido Democrático Mexicano con sus orígenes en la derecha religiosa.

En septiembre de 1993 se constituyó la Federación Estatal de Productores Agrícolas “El Barzón” y los agricultores de Jalisco no fueron los únicos que de afiliaron. Surgieron iniciativas similares en los estados de Chihuahua, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato. Para noviembre, se había formado una Confederación Nacional que, como producto de una ruptura entre las facciones de Jalisco y Zacatecas en agosto de 1994, resultó en otra agrupación con representación en 14 estados: La Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciales, Industriales y Prestadores de Servicios “El Barzón”.

El Barzón reunía a los rancheros mestizos del norte y occidente que habían sido golpeados muy duramente por la apertura comercial indiscri-

minada y la crisis financiera. Vinieron a complementar la alicaída movilización campesina casi al mismo tiempo que las comunidades indígenas del sureste en Chiapas anunciaban su presencia con la dramática insurrección armada el 1 de enero de 1994.

El 6 de diciembre de 1994, El Barzón hizo una marcha desde Querétaro a la Ciudad de México exigiendo una ley de moratoria de la deuda; los tractores rebeldes entraron en la capital por primera vez. En 1999, la sección agraria de El Barzón tuvo su congreso con 5,000 delegados de 25 estados de la república (de 32 entidades federativas). Reunió maiceros del Estado de México y Guerrero, frijoleros de Zacatecas, cultivadores de sorgo del centro de México, aguacateros de Michoacán, productores de piña de Oaxaca, de cítricos de Veracruz, y muchos otros. Se reunieron grandes empresarios, rancheros medios y campesinos medios a debatir, todos ellos víctimas financieras del dramático cambio operado en Banrural, el banco de desarrollo rural del gobierno, a fines de los años ochenta y principios de los noventa.

A través de acciones espectaculares, El Barzón logró, entre otras cosas, la suspensión de las incautaciones de ranchos por parte de los bancos, la devolución de sus bienes y energía eléctrica subsidiada. Pero sus demandas pronto se expandieron para incluir soberanía alimentaria y una declaración de emergencia agropecuaria. Promoviendo un Frente Nacional para la Defensa del Campo, lanzó movilizaciones conjuntas con la CIOAC, la CNPA, CNPA, UCD, UGOCP, UNTA, CODUC y en 2002 El Barzón se convirtió en una de las principales organizaciones al frente de la movilización del MCAM.

Ascendiendo de las cenizas: MCAM o El campo no aguanta más

Cien mil voces gritaban “¡El campo no aguanta más!” en el centro histórico de la Ciudad de México. La mayoría eran campesinos que de nuevo ponían al movimiento rural en las primeras planas de los diarios el 31 de enero de 2003. No era la primera marcha. A principios de diciembre de 2002, más de 3,000 pequeños campesinos marcharon por varios días a las oficinas públicas, la Cámara de Diputados y la Embajada estadouni-

dense en México. Para mediados de diciembre los cabalgantes a caballo de El Barzón entraron con fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro. Su demanda se resumía en seis propuestas para salvar y revalorizar al campo mexicano. La demanda central era la declaración de moratoria del capítulo agropecuario TLCAN. Pero el movimiento rural también exigía más recursos fiscales y mejores políticas públicas, seguridad, inocuidad y calidad alimentaria y el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas. Esta plataforma estaba sustentada por 12 organizaciones disímiles que se habían aliado desde noviembre de 2002: CIOAC, CNPA, FDCCH, UNORCA, CNON, Red Mocaf, AMUCSS, ANEC, CODUC, Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (UNOFOC) y Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM).

En el corto plazo, el movimiento respondía a tres temas: En primer lugar, de acuerdo al TLCAN, el 1 de enero de 2003 quedarían eliminadas el resto de las tarifas para todos los productos agropecuarios, con la excepción de maíz, frijol, azúcar y leche, cuyas tarifas se eliminarían en 2008. En segundo lugar, La Ley Agrícola de los Estados Unidos de 2002 (US Farm Bill) aumentó los subsidios para los granjeros estadounidenses en cerca del 80%. Finalmente, la propuesta de presupuesto del Presidente Vicente Fox para 2003 reducía la partida para México rural en 7% en términos reales. Para diciembre de 2002, la Cámara de Diputados aprobó 13 mil millones de pesos adicionales en recursos para el campo, pero nada sobre el TLCAN. Para enero, entonces, se renovó la movilización mediante la simbólica toma del Puente Internacional de Ciudad Juárez, que la conecta con el Paso Texas. Se hicieron manifestaciones en varios estados y la dirigencia del movimiento lanzó una huelga de hambre en la Ciudad de México. Para entonces, organizaciones campesinas como El Barzón y la UNTA se habían unido a la lucha, mientras que el oficialista CAP coqueteaba con los 12 grupos aliados.

Paralelamente, se alcanzaban acuerdos con fuerzas de la clase obrera como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y se pedía el apoyo del público en general en diversos foros. Tras una movilización sostenida por tres meses, finalmente se llegó al Acuerdo Nacional para el Campo con el gobierno el 27 de abril de 2003. El acuerdo admitía públicamente la

crisis rural y la necesidad de una nueva política estatal. Específicamente, reconocía la necesidad de excluir el maíz blanco y los frijoles del TLCAN y mientras esto se negociaba con los socios comerciales, controlar unilateralmente las importaciones. Se estableció la urgencia de una ley para la planeación agrícola por varios años, junto con los lineamientos para la autosuficiencia alimentaria, así como reformas profundas y normativas a las agencias y programas estatales. Para el corto plazo, el acuerdo asignaba tres mil millones de pesos adicionales para el campo y se constituía una comisión para dar seguimiento a la implementación del acuerdo que debía operar durante los siguientes cinco meses.

¿Representaba este acuerdo un vuelco histórico para el campo? Todo dependía de la capacidad del movimiento para darles seguimiento a los pocos acuerdos y seguir dando la lucha por las múltiples demandas no logradas. El aspecto más destacado del MCAM, sin embargo, es que representó nada menos que la constitución política del campesinado como clase. Si definimos la clase no como una posición estructural en las relaciones de producción sino como un proceso mediante el cual los hombres y mujeres articulan una identidad común como resultado de experiencias comunes, entonces la movilización del invierno 2002-2003 en México fue un gran paso hacia la construcción de una identidad de clase campesina y su constitución política. Esta fue precisamente la hazaña lograda por la organización que integraba el MCAM: reunir a los grupos de raíces agraristas, como la CIOAC, otros con orientación productiva, como la UNORCA; ensamblar bajo la misma sombrilla a los siempre-pobres militantes de la CNPA con los nuevos pobres alineados en El Barzón; combinar el conocimiento comercial de los cerealeros de la ANEC, con la perspicacia financiera del AMUCSS, con la sagacidad forestal y ambiental de la RED Mocaf y con la sabiduría en cultivos orgánicos y mercados de comercio justo de la CNOC. Ni siquiera era tan complicado integrar una plataforma común, un Plan Campesino para el Siglo XXI y trabajar como bloque en las negociaciones multilaterales con el gobierno.

Esta fue una convergencia clasista, con un programa clasista y una negociación clasista. Se llegó a estos logros no por que las organizaciones fuesen intransigentes sino por que eran comprensivas; no por que fuesen feroces sino por que eran incluyentes. Asimismo se llegó a estos logros

por que eran profundos, radicales e iban al fondo del asunto. Este fondo es el modelo inhospitalario y predador adoptado por los tecnócratas neoliberales en los años ochenta. Lo que une al campesino mexicano de hoy y la condición de posibilidad para su convergencia, es la exclusión económica, social y política que comparten todos los trabajadores de origen rural. Por lo tanto, la movilización de invierno constituyó la respuesta lenta pero rotunda se los campesinos al agrocidio iniciado 15 años antes. El MCAM es el heredero y la prolongación de organizaciones de convergencia amplia tales como el CAU, Monarca y COA, que abortaron a fines de los ochenta y principios de los noventa gracias a las artimañas clientelares de Carlos Salinas.

Si bien la lucha del MCAM estaba claramente enfocada en el ámbito nacional de la política, también puso atención a la resistencia global. Así pues mostró una participación destacada en las protestas contra la Organización Mundial del Comercio en Cancún en 2003, exigiendo la exclusión de alimentos. La UNORCA fue una de las mayores organizadoras de esta protesta como representante mexicana de la red Vía Campesina. La interrogante que queda por responder es si el MCAM ha logrado abarcar a una mayoría sustancial del campesinado en su seno y si su enfoque de negociar con el Estado ha tenido éxito.

Conclusiones: ¿Ha logrado el campesinado su formación político - cultural?

Como hemos argumentado en otro lugar (Bartra y Otero, 2005) la pieza que falta en el rompecabezas del MCAM han sido las organizaciones del movimiento indígena. Sin lugar a dudas, las organizaciones de productores indígenas estuvieron claramente articuladas al MCAM, como siempre lo han estado en las luchas rurales más amplias. Pero se trataba de organizaciones económicas de productores directos. Las organizaciones de escala nacional que han luchado específicamente por los derechos y la cultura de los pueblos indios, tales como el EZLN y el CNI, estuvieron ausentes de esta lucha. Podría ser que todavía estaban asimilando el revés legislativo que sufrieron en 2001, tras la aprobación del Congreso de una ley indígena muy menguada que no satisfizo las demandas centrales en torno a la au-

tonomía (Harvey, 2002; Otero y Jugenitz; Otero, 2006). Una explicación alternativa y más plausible es que las organizaciones indígenas de escala nacional tienen una perspectiva de más largo plazo que el propio MCAM, por un lado y por otro que las organizaciones indígenas enfocan su lucha en partes distintas del Estado, definido en términos amplios. Permítase-nos explicar estas diferencias, ya que ello nos permitirá responder si el campesinado mexicano ha logrado o no su formación político – cultural como clase.

A partir de la discusión es este ensayo, debería quedar claro que el componente central de las luchas campesinas clasistas ha estado referido por lo general a la preservación de su independencia del Estado y su autonomía de los partidos políticos. La independencia del Estado es crítica para que las organizaciones puedan sostener sus luchas enfocándose en los intereses campesinos, en vez de ser absorbidas por las redes clientelares y cooptadas por el Estado. Con este último resultado, si bien la organización puede recibir alguna concesión del Estado, la dinámica principal de la relación campesinos – Estado subordina a los campesinos a la lógica de la lealtad política hacia el Estado. La cooptación equivale entonces a un resultado político hegemónico – burgués.

Una organización que pueda retener su independencia, en cambio, puede tanto extraer políticas estatales a su favor como retener su independencia. Este es un componente crítico para que cualquier clase, comunidad o grupo se constituya como actor político - cultural. A su vez, tal actor político – cultural puede desarrollar su fuerza y movilización para promover políticas estatales de carácter popular – democrático (Otero, 2004).

La autonomía organizativa respecto a otras organizaciones o partidos políticos también se ha convertido en una preocupación central en México desde los años setenta del siglo XX. La mayoría de los partidos ha tenido la tendencia de tratar de subordinar para sus propios fines las luchas de todas y cada una de las organizaciones de masas bajo su influencia o afiliadas a ellos. Dependiendo del grado de democracia en cada partido (si es que existe), sus metas políticas pueden haberse fijado primordialmente por sus líderes pero rara vez por sus bases, que pueden incluir miembros de las organizaciones campesinas. Además, tradicionalmente se han cooptado los

líderes de las organizaciones de masas, mediante puestos en el partido o en el gobierno, subordinando así las metas campesinas. Esta dinámica ha privado a sus organizaciones de masas y sus bases de una representación adecuada frente a las instituciones del estado, el cual las acecha para la cooptación organizativa.

La dinámica de la cooptación ha sido tan prominente en la política mexicana que hasta un movimiento que parecía tan amplio y vigoroso como el MCMA terminó fragmentándose hacia 2004, tan solo dos años después de su surgimiento. Una de las claves de la explicación de dicha fragmentación es que varios de los líderes de sus organizaciones regionales constitutivas terminaron por ceder ante pequeñas concesiones para sus bases, ya que se consideraba necesario tener algún logro concreto (Celis Callejas, 2005; Sánchez Albarrán, 2007). Pero esas concesiones de corto plazo conllevan dos tipos de resultado: Por un lado, la desmovilización de largo plazo del grupo cooptado; por otro, la fragmentación a escala nacional de la organización que podría haber abarcado a la clase campesina en su conjunto.

El hecho de que las organizaciones indígenas de escala nacional tengan una perspectiva de más largo plazo que el MCAM queda subrayado por el hecho de que también tienen un tipo distinto de enfoque en sus luchas. Aparte de las luchas económico-corporativas de las organizaciones indígenas locales y regionales, que ciertamente han estado presentes en las luchas campesinas nacionales, las de mayor cobertura nacional se han enfocado predominantemente en cuestiones de autonomía y de derechos y cultura indígenas (Díaz Polanco, 1992, 2007; Díaz Polanco y López Rivas, 1994; Díaz Polanco y Sánchez, 2003). Además, si bien esta lucha se tiene que ganar dentro de las instituciones de la sociedad política o El Estado en sentido estricto, esto no significa que dichos logros se tengan que ganar directamente adentro del Estado, ni que las organizaciones tengan que ser cooptadas. De hecho, después de la insurrección del EZLN en 1994, la movilización indígena se ha enfocado en la sociedad civil: ha intentado consolidar la sociedad civil de tal manera que a la larga los que mandan, manden obedeciendo. Se trata de invertir la lógica de gobierno desde arriba hacia un gobierno que responda a las presiones de la sociedad organizada desde abajo.

Puesto que el EZLN ha recibido apoyo de la mayoría de los pueblos indios de México, incluyendo su iniciativa para expandir la organización de la sociedad civil a partir de la “Otra campaña” (Leyva Solano, 2005), lanzada en junio de 2005 en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (CCRI-EZLN, 2005), podemos suponer que tales organizaciones también están de acuerdo con enfocarse en la sociedad civil. El EZLN ha dicho repetidamente que no lucha por el poder estatal. Más bien, se enfoca en vigorizar la sociedad civil para contraponerse al poder abrumador del Estado. Como lo ha planteado Alain Touraine, el desafío futuro del EZLN es inmenso: rechazar tanto la posibilidad del aislamiento local o el diluirse en un gran partido político, a la vez que trata de convertir al movimiento indígena en el fermento para la renovación de la democracia mexicana (citado en Martínez y Mergier, 2001:34).

Al enfocarse en “la otra campaña”, que consiste en consolidar un amplio movimiento social de las clases y grupos subalternos, los zapatistas han tratado de asegurarse de que cualquier político o partido que acceda al poder tendrá que rendir cuentas a la sociedad. De hecho, la “otra campaña” no se trata de construir una coalición de la clase campesina, si no de articular una que abarque a todo el pueblo explotado y oprimido de México.

Surge la interrogante respecto a los puentes necesarios que habrá que tender entre este tipo de perspectiva y la de la mayoría de las organizaciones populares, acostumbradas como están a enfocarse en la sociedad política, a las redes clientelares y las posibles canonjías que se puedan obtener de una relación subordinada respecto al Estado. ¿De qué manera podría el movimiento indígena enfocado en la sociedad civil articularse al resto del campesinado y las clases populares que tienen esperanzas de conseguir que mejores políticos lleguen a los puestos claves del Estado? Esta pregunta no se pudo resolver ni poner en práctica en la coyuntura electoral de 2006. El EZLN y el CNI se mantuvieron al margen de una lucha en la que estuvo a punto de obtener el triunfo Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición de tres partidos de la socialdemocracia mexicana.

Para avanzar en las metas de largo plazo de las organizaciones indígenas tendrán que aprender a hacer alianzas con la izquierda realmente existente

en la sociedad política. Más allá de la implementación regional en Chiapas, con esa parte de la clase política se podrían empezar a ensayar a escala nacional los mecanismos democráticos que implica el “mandar obedeciendo”, que sin duda incluyen la rendición de cuentas y el derecho de las bases a exigir la revocación del mandato de sus representantes electos.

Referencias bibliográficas

- Acuerdo Nacional para el Campo. Por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentaria, en Cuadernos Agrarios, Nueva Época, Número especial: ¡El campo no aguanta más!, México, 2003.
- Bartra, Armando. 1985. Los herederos de Zapata. Movimientos Campesinos Posrevolucionarios en México. ERA, México.
- Bartra, Armando. 1992. Las organizaciones económicas campesinas ante la reforma rural, en Cuadernos Agrarios, Nueva Época, no. 5-6, México.
- Bartra, Armando. 2003^a. Cosechas de ira. Economía política de la contrarreforma agraria. Itaca, Instituto Maya, México.
- Bartra, Armando. 2003b. ¡Caracoles! Descifrando la treceava estela, *Memoria*, no. 176, México City, Cemos.
- Bartra, Armando. 2003c. Los ríos crecidos. Rústicas revueltas del tercer milenio, en Cuadernos Agrarios, Nueva Época, Número especial: ¡El campo no aguanta más!, México.
- Bartra, Armando. 2004. “Rebellious Cornfields: Toward Food a Labour Sovereignty.” Pp 18-36 in Otero 2004a.
- Bartra, Armando, and Gerardo Otero. 2005. “Indian Peasant Movements in Mexico: The Struggle for Land, Autonomy and Democracy.” Pp. 383-410 in *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*. Sam Moyo and Paris Yeros, eds. London and New York: Zed Books.
- Bellinghausen, Hermann. La caravana Zapatista hará visible un México ignorado. En la Caravana de la Dignidad Indígena. El otro jugador. La Jornada. México, 2001.
- Canabal Cristiani, Beatriz. 1991, Las organizaciones campesinas y la política del nuevo gobierno, en Cuadernos Agrarios, Nueva Época, no. 1, México.

- CCRI-EZLN, 2005. "Sexta Declaración de la Selva Lacandona", 29 and 30 June, and 1 July. *La jornada*. <http://www/jornada.unam.mx/>.
- Calis callejas, Fernando. 2005. "El movimiento que no aguanto más." *Masiosare*, Political Supplement of *La jornada*. 3 April. <http://www.jornada.unam.mx/2005/abr05/050403/mas-celis.htm> (accessed: 10 April 2005).el
- Centeno, Miguel Ángel. 1994. *Democracy within Reason: Technocratic Revolution in Mexico*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- CNPA. 2003. Veinte años de lucha por la tierra, CNPA, Instituto maya, México.
- Cornelius Wayne A. 2000. *Mexican Politics in Transition*. La Jolla, CA: Centre for U.S.- Mexican Studies, University of California, San Diego.
- Díaz – Polanco, Héctor. 1992. Autonomía, territorialidad y comunidad indígena. Las reformas de la legislación agraria en México. *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, no. 5-6, México.
- Díaz – Polanco, Héctor. 1997. *Indigenous Peoples in Latin America: The Quest for Self- Determination*. Boulder, Colo: Westview Press.
- Díaz – Polanco, Héctor y Gilberto López y Rivas, 1994. "Fundamentos de las Autonomías regionales." *Cuadernos Agrarios*. Nueva Época, no. 8-9.
- Díaz – Polanco, Héctor y Consuelo Sánchez, 2003. *México diverso: El debate por la autonomía*. México; Siglo XXI Editores.
- Flores Félix, Joaquín. 1992. "De aquí para poder sacarnos, primero tendrán que matarnos." *Cuadernos Agrarios*. Nueva Época, no. 5-6.
- Flores Félix, Joaquín, 1995. "Los pueblos indios en la búsqueda de espacios." *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, no. 11-12.
- Flores Félix, Joaquín. 1998. *La revuelta por la democracia. Pueblos indios, política y poder en México*. Mexico City: UAM-X y El Atajo.
- García, María del Carmen, Xochitl Leyva y Aracely Burguete. 1998. "Las organizaciones campesinas e indígenas de Chiapas frente a la reforma del Estado: una radiografía." *Cuadernos agrarios*, Nueva Época, no. 16.
- Garza Bueno, Laura Elena y María Lilia Gonzaga. 1992. "Vaquerías. Proyecto piloto de la renovación agraria" *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, no. 5-6.
- González Casanova, Pablo. 1983. *El Estado y los partidos políticos en México*. Mexico City: Era.
- González Humberto. 2004. "Convergence: Social Movements in Mexico in the Era of Neoliberal Globalism." Pp. 204-220 in Otero, 2004a.
- Gordillo Gustavo. 1998. *Campesinos al asalto del cielo: de la expropiación estatal a la apropiación campesina*. Mexico City: Siglo XXI.

- Gordillo, Gustavo. 1990. *Reformando la revolución mexicana*. Mexico City: El Nacional.
- Harvey, Neil. 2002. "PPP y Derechos Indígenas." *La Jornada* (Mexico City daily). 28 December. Available at (last accessed 28 December 2002) <http://www.jornada.unam.mx/2002/dic02/021228/013a1pol.php?origen=opinion.html>
- Hellman, Judith Adler. 1994. "Mexico and Popular Movements, Clientelism, and the Process of Democratización." *Latin American Perspectives*, 21(2): 124-142.
- Hernández Navarro, Luis. 1992. "Cambio y Resistencia en el movimiento campesino." *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, no. 5-6.
- Hernández Navarro, Luis. 1994. "De Zapata a Zapata: un sexenio de reformas estatales en el agro." *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, no. 8-9.
- Leyva Solano, Xochitl. 2005. "Redes y Zapatismo." *La jornada*. 20 August (accessed same date) <http://www.jornada.unam.mx/2005/ago05/050820/021a2pol.php>.
- Mackinlay, Horacio and Gerardo Otero. 2004. "State Corporatism and Peasant Organizations: Towards New Institutional Arrangements." Pp. 72-88 in Otero, 2004a.
- Martínez Sanjuana and Anne Mergier. 2001. "Le Bot, Miterrand, Saramago, Touraine, Vazquez Montalbán: Ahora viene los verdaderos desafíos de los zapatistas." *Proceso*. Num. 1269.25 February, pp. 30-34.
- Martínez Torres, María Elena. 2004. "Survival Strategies in Neoliberal Markets; Peasant Organizations and Organic Coffee in Chiapas." Pp169.185 in Otero, 2004a.
- Mestries Francis. 1997. "La crisis financiera rural y el agrobarzón." *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, no. 15.
- Monarca. 1991. "El plan de Anenecuilco." *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, no. 5-6.
- Morton, Adam David. 2003. "Structural Cahnge and Neoliberalism in México: 'Passive Revolution' in the Global Political Economy." *Third World Quarterly*. 24 (4): 631-653.
- Otero, Gerardo. 1989. "The New Agrarian Movement: Toward Self-Management and Democratic Production." *Latin American Perspectives*. 16(4): 29-59.
- Otero Gerardo. 1991. "Comments to Gustavo Gordillo" Symposium on: "Policies for Modernizing the Agricultural Sector: Financial and Technical Support," *The Development of Agriculture in Mexico: Current Prospects and Policies*, Texas Papers on Mexico, Pre publication working papers of the Mexican Center, Institute of Latin American Studies, University of Texas at Austin, Conference Publication Series No. 90-02, pp. 41-44.

- Otero, Gerardo, ed. 1996. *Neoliberalism Revisted: Economic Restructuring and Mexico's Political Future*. Boulder, Colo. And Oxford: Westview Press.
- Otero, Gerardo. 1999. *Farewell to the Peasantry? Political Class Formation in Rural Mexico*. Boulder and Oxford: Westvie Press. (Arevised and expanded Spanish edition is available as: ¿Adiós al campesinado? *Democracia y formación política de las clases en el México rural*. México City: M.A. Porrúa, UAZ and SFU, 2004.)
- Otero, Gerardo. 2004 a. *Mexico in Transition: Neoliberal Globalism, the State and Civil Society*. Nova Scotia: Ferwood Publishing; London: Zed Books.
- Otero, Gerardo. 2004b. "Global Economy, Local Politics: Indigenous, Civil Society and Democracy." *Canadian Journal of Political Science*. 37 (2):325-346.
- Otero, Gerardo and Heidi Jugenitz. 2003. "Challenging National Borders from Within: The Political-Class Formation of Indigenous Peasants in Latin America." *Canadian Review of Sociology and Antropology*. 40(5): 503-524.
- Paz Paredes, Lorena. 1995. Una Mirada al período de crisis de la cafecultura mexicana. Recuento de políticas oficiales y respuestas campesinas. *Cuadernos Agrarios*, Nueva Época, no.11-12.
- Samstad, J.G. 2002. "Corporatism and Democratic Transition; state and Labor During the Salinas and Zedillo Administrations." *Latin American Politics and Society*. 44(4): 1-28.
- Singelmann, Peter. 2004. "Institutional Democratization and Changing Political Practices: 'The Sugarcane Growers' unions of the PRI." Pp. 89-103 in Otero, 2004.
- UNORCA.1992. "Declaración de Temporal". *Cuadernos Agrarios*. Nueva . Época, no. 6-7.
- Valdés Ugalde, F. 1996. "The Private Sector and Political Regime Change in Mexico." Pp. 127-148 in Otero, 1996.